

ACTA DE PLENO NO JURISDICCIONAL DE UNIFICACIÓN DE CRITERIOS
SECCIONES CIVILES

AUDIENCIA PROVINCIAL DE MURCIA.

Murcia, a 24 de enero de 2025.

En la fecha indicada, se procede a la celebración del Pleno no Jurisdiccional de las secciones civiles de esta Audiencia Provincial de Murcia.

Asisten personalmente o por videoconferencia:

D. Miguel Ángel Larrosa Amante (Presidente)

D. Cayetano Blasco Ramón.

D. Andrés Pacheco Guevara

D. José Francisco López Pujante

D. Juan Martínez Pérez

D. Francisco Navarro Campillo

D^a Beatriz Ballesteros Palazón

D. Salvador Calero García

D. José Manuel Nicolás Manzanares

D. Jacinto Aresté Sancho

D. Edmundo Tomás García Ruiz

D. Ignacio Munitiz Ruiz

D. Fernando Madrid Rodríguez

Asisten representados en virtud de delegación de voto y representación:

D^a M^a Ángels Galmes Pascual (representada por D. Edmundo Tomás García Ruiz).

D. Enrique Domínguez López (representado por D. José Manuel Nicolás Manzanares).

Abierto el acto por el Presidente de la Audiencia Provincial, de acuerdo con el orden del día establecido, y tras la correspondiente deliberación, **se adoptan**, los siguientes **ACUERDOS**:

1.- Aplicación de la doctrina del retraso desleal en ejecuciones reaperturadas tras un periodo largo de inactividad.

Se plantea la cuestión relativa a los efectos derivados de las actuaciones de los fondos de inversión que solicitan la reapertura de ejecuciones de todo tipo que están archivadas desde hace muchos años. Dicha solicitud se produce a los meros efectos de sustitución procesal y suelen pedir que se acuda al PNJ para solicitar información actualizada.

Tras el correspondiente debate se adoptan los siguientes acuerdos sobre los aspectos planteados:

- a. **No es posible apreciar la caducidad de oficio** cuando se solicite la reapertura de una ejecución que ha estado paralizada durante un largo periodo de tiempo (unanimidad).
- b. **No es posible apreciar la prescripción de oficio ni el retraso desleal** en aquellos casos en los que, **cuando se solicita la reapertura de la ejecución, no había transcurrido todavía el plazo de quince años** del artículo 1964 CC, en su redacción vigente a la fecha del inicio de la ejecución desde la última actuación procesal del procedimiento ejecutivo (unanimidad).
- c. **Es aplicable la doctrina del retraso desleal**, incluso de oficio, en aquellos casos en los que el procedimiento de ejecución **había estado paralizado más de quince años desde la última actuación procesal**, bien entendido que el plazo señalado no se toma en consideración como plazo de prescripción, que no es aplicable de oficio en sede de ejecución, sino por constituir un periodo de tiempo lo suficientemente extenso para entender que, sobre la base del artículo 7.2 CC, el ejecutado puede razonablemente esperar que la deuda no iba a ser reclamada, y sin perjuicio de atender a las circunstancias del caso concreto (adoptado por mayoría de 13 votos a favor y 2 en contra).

2.- Recursos que caben contra el auto del JPI denegando la suspensión del lanzamiento en supuestos de vulnerabilidad.

Ante la existencia de alguna discrepancia entre los criterios de las secciones de esta Audiencia Provincial, se acuerda por mayoría de 13 votos a favor y 1 en contra, unificar el criterio sobre esta materia en el sentido de la **inadmisibilidad**

del recurso de apelación contra todos aquellos autos en los que se deniega la suspensión del lanzamiento en supuestos de vulnerabilidad.

3.- Acumulación de acciones en una misma demanda derivada de tarjetas revolving de la nulidad por usura (juicio ordinario) y nulidad de condiciones generales de la contratación (juicio verbal).

Dicha cuestión deriva de la modificación de los artículos 249 y 250 LEC llevada a cabo por el RD Legislativo 6/2023 en virtud de la cual se mantiene el juicio ordinario por razón de la cuantía (art. 249.2) en relación a la nulidad por usura y el juicio verbal (250.14ª) para la nulidad derivada de la abusividad de condiciones generales de la contratación, habiéndose planteado dudas sobre la procedencia de dicha acumulación.

Tras la deliberación realizada y, de acuerdo con lo previsto en el artículo 73.1.1º LEC, siempre que el JPI sea competente para conocer de las dos acciones acumuladas de forma subsidiaria, se acuerda por unanimidad que **se tramite el procedimiento por la vía del juicio ordinario, considerándose admisible dicha acumulación de acciones.**

4.- Acumulación de diversas ejecuciones sobre diversos inmuebles derivados de una misma escritura de préstamo hipotecario.

Ante la existencia de algunas discrepancias en diversas resoluciones se acuerda, por unanimidad, unificar como criterio de esta Audiencia Provincial el **criterio favorable a la acumulación** en un mismo proceso de ejecución hipotecaria de la ejecución de las **diversas fincas incluidas en la misma hipoteca, siempre que el acreedor y el deudor sea la misma persona.**

Igualmente se acuerda considerar **inadmisible dicha acumulación cuando no exista la identidad de acreedor y deudor** en relación con las fincas cuya ejecución se pretende realizar de forma acumulada.

5.- Consecuencias, respecto de los intereses, de la declaración de nulidad del contrato por usura (art. 3 LRU o 1303 CC).

Se plantea el problema como consecuencia de que el artículo 3 LRU sólo obliga a la restitución recíproca de prestaciones, sin incluir intereses legales desde el pago, mientras que el artículo 1303 CC impone la devolución de cantidades con sus intereses legales.

Tras la correspondiente deliberación se acuerda, por unanimidad, los siguientes criterios de unificación a nivel de Audiencia Provincial de Murcia:

- En los casos de nulidad por **usura** de un contrato de préstamo o tarjeta, debe aplicarse la **literalidad del artículo 3 LRU** y por ello las partes sólo deberán devolverse lo abonado por cada parte a la contraria **sin incluir la condena al pago de intereses adicionales**. Dichos intereses sólo podrán generarse a partir de la liquidación que se haga en ejecución de sentencia y serán los intereses del artículo 576 LEC desde el auto que apruebe la citada liquidación.
- En los casos de nulidad del contrato por **falta de transparencia**, se aplicará lo previsto en el artículo 1303 CC y las cantidades **generarán intereses legales** a favor de cada una de las partes.

6.- Control de usura por tramos y sus consecuencias sobre la acción subsidiaria por falta de transparencia.

Existen, en la actualidad, algunas resoluciones que reflejan criterios parcialmente contradictorios en relación con el control de usura por tramos, de acuerdo con el criterio establecido por el Tribunal Supremo desde la STS 317/23, de 28 de febrero y reiterado en diversas resoluciones posteriores, en relación con la existencia de un nuevo contrato cada vez que se modifica por la entidad de crédito el interés remuneratorio aplicable a la tarjeta de crédito o préstamo. La unificación de criterios debe centrarse en dos aspectos concretos: a) la aplicación de los tramos como consecuencia del cambio de interés remuneratorio; y b) las consecuencias que la apreciación de la usura sobre uno o varios tramos tiene en relación con la acción subsidiaria de control de transparencia sobre los tramos de duración del contrato para los que no se declaró la concurrencia de usura.

Tras la deliberación realizada se adoptaron los siguientes acuerdos:

a.- Aplicación del control de usura por tramos.

- Si el contrato de tarjeta o préstamo **no contenía intereses usurarios en el momento de su firma**, al no superar la diferencia de seis puntos de acuerdo con los criterios jurisprudenciales aplicables, **pero sí alcanza una diferencia superior al realizar el test de usura en cualquiera de los tramos en los que se modifica el interés remuneratorio** por la entidad de crédito, **se aplicará el control de usura por tramos** y así se declarará en relación con los periodos en los que se supere el límite fijado por la jurisprudencia de seis puntos porcentuales al realizar el test de usura (unanimidad).

- Sin embargo, en aquellos casos en los que el contrato de tarjeta o préstamo establecía unos **intereses remuneratorios superiores a seis puntos a la fecha de la firma de dicho contrato**, **procede declarar la usura y la nulidad del contrato**,

sin realizar control por tramos dado que dicha nulidad no puede ser sanada por los cambios posteriores de intereses remuneratorios, al haberse anulado el contrato por imperativo del artículo 3 LRU (mayoría de 14 votos a favor y 1 en contra).

b.- Consecuencias derivadas de la aplicación del control de usura por tramos.

- En los casos en los que se haya declarado la usura de uno o varios tramos de aplicación de intereses remuneratorios a lo largo de toda la vida del contrato, si el interés inicial no fuese usurario, debe de entenderse que se **estima parcialmente la acción principal de nulidad por usura, procediendo entrar, sobre los tramos no declarados usurarios, al control de transparencia del contrato**, al ejercitarse como acción subsidiaria que sólo puede ser objeto de examen en caso de desestimación total o parcial de la acción principal (aprobado por unanimidad).

7.- Recursos que caben contra la desestimación de la oposición en ejecuciones por motivos procesales.

Se plantea la necesidad de unificar este criterio como consecuencia de la necesidad de clarificar, ante la dudosa redacción de los artículos 561 y 562 LEC, en relación con el artículo 559 LEC, los casos en los que cabe admitir el recurso de apelación interpuesto contra el auto del JPI que resuelve la oposición formulada en sede de ejecución, tanto ordinaria como hipotecaria.

Tras la deliberación se adoptaron, por unanimidad, los siguientes acuerdos:

- En el caso de que en el mismo auto se **resuelvan motivos de naturaleza procesal y de fondo, si es posible interponer recurso de apelación** contra dicha resolución.
- En el caso de que se resuelva en el auto de primera instancia sólo sobre **motivos de naturaleza procesal**, debemos distinguir:
 - o En el caso de que el JPI **estime** los motivos procesales alegados, **debe de ser admitido el recurso de apelación** al tratarse de una resolución definitiva que pone fin al incidente de oposición y a la propia ejecución.
 - o En el caso de que el JPI **desestime** los motivos procesales, de acuerdo con lo previsto en el artículo 559.2 LEC, **no se podrá interponer recurso de apelación y sí solo recurso de reposición** ante el JPI.

8.- Criterios de no admisibilidad de los procedimientos monitorios por el control del artículo 815.3 LEC.

Ante la proliferación de recursos de apelación interpuestos contra las resoluciones dictadas por los JPI de no admisión de la petición inicial de juicio monitorio ante la falta de documentación suficiente presentada por las entidades de crédito, normalmente fondos de inversión que han adquirido una cartera de créditos, a los efectos de generar una mayor seguridad jurídica, se procede a unificar los siguientes criterios por unanimidad:

- A. Contrato de préstamo: Para la admisión de un monitorio derivado de un contrato de préstamo, es preciso que el actor **aporte el cuadro de amortización, así como un extracto de los movimientos** que permita apreciar, a los efectos del artículo 815 LEC, el origen de la deuda y las cantidades que la integran. Si no se aportan, no procede la admisión del monitorio.
- B. Reconocimiento de deuda: Cuando por la entidad de crédito se utilice como título del juicio monitorio un documento de reconocimiento de deuda firmado por el deudor, **no es posible el control de abusividad** de las cantidades reconocidas como debidas, por lo que deberá de admitirse.
- C. Documentación suficiente a los efectos de la admisión de monitorios sobre la base de tarjetas de crédito: Se entiende insuficiente, a los efectos de la admisión, la mera aportación del contrato **si no va acompañada de un extracto detallado de los movimientos de la tarjeta** desde la fecha de la contratación con el debido desglose de las cantidades que se reclaman por todos los conceptos (intereses remuneratorios, de demora, comisiones, etc.).
- D. Control de oficio de transparencia de los intereses remuneratorios en monitorio derivado de tarjeta revolving: dentro del control judicial del artículo 815.3 LEC, cabe el control de transparencia e inclusión de los intereses remuneratorios, por lo que es posible **la apreciación de oficio de dicha falta de transparencia en la fase inicial de admisión del juicio monitorio**.
- E. Control de oficio de la usura: Al afectar a los intereses remuneratorios, **no es posible el control de oficio de la usura** en los contratos de préstamo o tarjeta revolving planteados por la vía del juicio monitorio, sin perjuicio del derecho del demandado de su alegación en fase de oposición.
- F. Casos en los que procede la subsanación de defectos procesales previa a la admisión: Las entidades actoras, fondos de inversión que generan una alta litigiosidad, son plenamente conocedoras de los criterios reiteradamente señalados por los JPI y por la AP, de manera que al no aportar los documentos que vienen siendo requeridos, no pueden solicitar la subsanación en relación a documentos que sabían que debían de presentar con la petición inicial de juicio monitorio, por lo que se acuerda

que **no debe de requerirse a la entidad de crédito actora a los efectos del artículo 231 LEC en materia de subsanación de los defectos que determinan la no admisión del juicio monitorio.**

9.- Valoración sobre nulidad del IRPH tras la última STJUE.

Se acuerda por unanimidad suspender los rollos de apelación en los que constituya objeto de dicho procedimiento la nulidad del IRPH hasta que por el Tribunal Supremo se dicte nueva resolución interpretando la última sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea.

Por Beatriz Ballesteros se ofrece para realizar un estudio de los criterios derivados de la STJUE y la futura STS sobre el particular a los efectos de unificación de criterios en una futura junta de unificación de criterios.

10.- Nulidad por usura en contratos de microcréditos.

Se anticipa que el criterio que se viene siguiendo en la sección 1ª y la sección 5ª (la sección 4ª todavía no ha resuelto ningún recurso sobre microcréditos) es favorable a la **declaración de usura de estos contratos** sobre la base de que el interés de comparación en el test de usura, ante la falta de un tramo específico en las tablas publicadas por el Banco de España, es el interés de crédito al consumo inferior a tres años y que no se acepta como criterio de comparación el informe emitido por la Asociación de Empresas de Microcrédito que se suele aportar con la contestación de la demanda.

Una vez aprobados dichos criterios en este pleno no jurisdiccional, los mismos, con el debido razonamiento jurídico, se irán integrando en las diferentes resoluciones que se vayan dictando por todas las secciones civiles de esta Audiencia Provincial, con pleno respecto a la necesidad de adaptarse a las circunstancias del caso concreto objeto de enjuiciamiento.

Procédase a la notificación de esta unificación de criterios a todos los magistrados de la Audiencia Provincial con competencia civil, al Presidente del TSJ de la Región de Murcia, a los Jueces Decanos de los partidos judiciales de la Región de Murcia, a los efectos de su conocimiento y difusión entre los jueces de primera instancia y al Gabinete de Prensa del TSJ a los efectos de su publicación en el portal de transparencia del TSJ y difusión general.

Así se acuerda y firma por el Presidente de la Audiencia Provincial.

Miguel A. Larrosa Amante

Presidente de la AP Murcia